

La fotografía migratoria de Chile cambió de manera drástica en menos de dos décadas. Lo que en 2006 aparecía como un fenómeno acotado —cuando la encuesta Casen estimaba en 163 mil el número de personas extranjeras— hoy se convirtió en un componente estructural de la sociedad y de la economía. En 2023, de acuerdo con los últimos datos del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas, la población migrante alcanzó 1.918.583 personas, una expansión que reconfiguró el mercado laboral, los servicios públicos y el debate político en torno a fronteras, regularización e integración.

El aumento tiene un rostro definido. La migración venezolana, impulsada por la crisis política y social en ese país, empujó el alza y consolidó una presencia mayoritaria. A diciembre de 2023, los ciudadanos venezolanos en Chile totalizaron 728.586, equivalente al 38% del universo de extranjeros. Ese salto convirtió a esta comunidad en la de mayor crecimiento dentro del país y, al mismo tiempo, en la más expuesta a los dilemas del sistema migratorio, principalmente por la magnitud de la irregularidad: según la misma estimación, 252.591 personas estarían en situación no regular.

Los números no solo describen cuántos llegaron, sino cómo viven. La inserción laboral, clave para la integración y para la estabilidad de los hogares, muestra avances importantes en volumen de empleo, pero con señales de precariedad difíciles de ignorar. Un análisis del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, basado en datos del INE actualizados al trimestre septiembre-noviembre, estimó que hay 466.204 venezolanos ocupados y 44.536 desocupados. Con esos registros, la tasa de desempleo de esa población se ubicó en 8,7% en el período, un nivel que supera con holgura el 6,8% registrado en el mismo trimestre de 2024.

Detrás de esa diferencia aparecen factores que tensionan el proceso de incorporación. La barrera más evidente es la informalidad, que se traduce en trabajos sin contrato, sin cotizaciones o con vínculos laborales frágiles. Entre los migrantes venezolanos, la tasa llega a 25,6%, un indicador que suele asociarse a menor protección social, ingresos inestables y dificultades para acceder a crédito, arriendo formal o redes de seguridad en caso de enfermedad o



Migración en Chile: crece la población extranjera y se profundizan brechas laborales en la comunidad venezolana

El país pasó de 163 mil migrantes estimados en 2006 a 1.918.583 en 2023; el grupo venezolano ya representa el 38% del total y enfrenta desempleo superior al promedio, además de altos niveles de subempleo e informalidad.

pérdida de empleo. Aún más revelador es el subempleo, una condición que, en términos simples, expone una contradicción: personas que sí trabajan, pero no en las horas que necesitan o no en el nivel de calificación que su formación permitiría. Este fenómeno se presenta de dos maneras que conviven en la misma realidad. Por un lado, están los ocupados con jornada parcial involuntaria, disponibles para desempeñarse más horas, pero sin opciones inmediatas para hacerlo. Por otro, quienes poseen educación superior completa y terminan en labores de mediana o baja calificación, un desajuste que erosiona expectativas, afecta trayectorias y reduce productividad. En el grupo venezolano, la tasa de subempleo alcanzó 33,9%, un porcentaje que sugiere que el desafío ya no es solo “conseguir trabajo”, sino acceder a uno que permita sostener un proyecto de

vida. La presencia de irregularidad también influye en estas cifras. Cuando una persona carece de documentación al día, su margen de negociación se estrecha y se vuelve más probable que acepte condiciones que un trabajador formal rechazaría. Eso abre un espacio para abusos, salarios por debajo del mercado, turnos extensos sin resguardo y dependencia de intermediarios. En la práctica, el estatus migratorio termina siendo una variable económica: define el tipo de empleo disponible y el nivel de protección al que se puede aspirar. El fenómeno tiene impacto nacional y no se limita a regiones específicas. En el comercio, los servicios y el transporte se observa una presencia creciente de trabajadores venezolanos, muchas veces en ocupaciones de alta rotación. Paralelamente, en sectores profesionales, la convalidación de títulos y la

certificación de competencias siguen siendo un cuello de botella que empuja a médicos, ingenieros o docentes a desempeñarse lejos de su especialidad, no necesariamente por falta de capacidad, sino por obstáculos administrativos y requisitos que toman años. El dato del desempleo superior al promedio también invita a mirar el momento económico. Cuando el mercado se enfría, los grupos más nuevos o con redes más débiles suelen recibir el golpe primero: menos contactos, menor estabilidad contractual y, en ocasiones, mayor concentración en rubros sensibles a la desaceleración. Si a eso se suman costos de vida en alza y arriendos elevados en zonas urbanas, el riesgo de precarización aumenta incluso para quienes lograron insertarse. Desde una perspectiva de política pública, la radiografía plantea un doble mandato. Por

una parte, regularización y control no pueden ser vistos como asuntos aislados del empleo: formalizar reduce vulnerabilidad, mejora recaudación y fortalece la protección social. Por otra, la integración laboral requiere herramientas concretas: aceleración de procesos para permisos de trabajo, rutas claras para validar estudios, capacitación alineada con demanda real y fiscalización que evite que la irregularidad se convierta en un mercado paralelo de mano de obra barata. El debate también toca fibras sociales. En un país que pasó de contar migración como fenómeno minoritario a convivir con casi dos millones de extranjeros, la convivencia cotidiana se juega en el trabajo, la escuela, el barrio y el acceso a servicios. Cuando el empleo es inestable, crece la sensación de competencia por oportunidades, se amplifican estigmas y se vuelve más

difícil construir cohesión. En cambio, cuando la inserción es formal y acorde a habilidades, la migración tiende a aportar dinamismo, emprendimiento y capital humano, con beneficios más visibles para el conjunto. La magnitud del cambio obliga a una lectura sin caricaturas. Chile ya no discute si habrá migración, sino qué modelo de gestión tendrá: uno que empuje a miles a la informalidad y al subempleo, o uno que transforme esa presencia en integración productiva, con reglas claras y exigibles. Las cifras del 2023 describen una realidad instalada; los indicadores laborales recientes muestran que el desafío no terminó con el ingreso al país, sino que sigue abierto en la calidad del trabajo disponible. Y, en el caso venezolano, los datos apuntan a una conclusión directa: la integración avanza, pero lo hace con brechas que, si no se abordan, pueden volverse permanentes.